

ACTA Nº1121 - SESIÓN ORDINARIA 8/2026 - En la ciudad de Montevideo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, en su sede de la calle Rincón 528, piso 8, se reúne en sesión ordinaria el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, con la participación de la Presidenta Dra. Ana Ferraris, el Vicepresidente Cr. Alfredo Asti y el Vocal Dr. Luis Calabria. Por Secretaría Leticia Nasso. Abierto el acto siendo las 11:00 horas se pasa a la consideración del orden del día.

Asunto fuera del orden del día

1) Licencia miembros del Directorio. Se comunica licencia reglamentaria de la Presidenta Dra. Ana Ferraris del 14 al 30 de abril del corriente.

Se resuelve:

Tomar conocimiento.

Apruébese la licencia reglamentaria de la Presidenta Dra. Ana Ferraris desde el 14 al 30 de abril del 2026 inclusive.

Notifíquese a Administración y Finanzas a sus efectos.

2) Para conocimiento, a solicitud del Director Vicepresidente Cr. Alfredo Asti: Nuevamente se han dado filtraciones a temas internos de JUTEP en el Semanario Búsqueda del pasado jueves 12 de marzo.

Preocupan las filtraciones, pero más la parcialidad e intencionalidad de las mismas. No voy a extenderme en las mismas para no dar más combustible a las llamas, pero resulta evidente que estas publicaciones pretenden afectar a la JUTEP y se da en momentos que, a diferencia del periodo anterior, se están

3783

haciendo los máximos esfuerzos por cumplir con la ley que nos mandata en lo que tiene que ver con el análisis técnico de las Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos y en general con la lucha contra la Corrupción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos".

3) Funcionarios obligados que no han presentado declaración jurada al cesar (artículo 16, inciso 3°, de la Ley N°17.060 de 23 de diciembre de 1.998)

Se resuelve:

Oficiar a la Oficina Nacional del Servicio Civil a fin de solicitar colaboración para dar cumplimiento al mandato legal, y al Diario Oficial para darle la difusión fehaciente correspondiente.

4) La Presidenta da cuenta a los miembros del Directorio de las reuniones realizadas los días 16/3/26 con miembros de la Sociedad Uruguaya de Física Médica y 17/3/26 con funcionarios de AGESIC, DGI Y AIN.

Se resuelve:

Tomar conocimiento de las actas de reunión.

5) Situación sobre notificaciones erróneas enviadas a funcionarios en relación a declaraciones juradas a destruir.

Se resuelve:

Enviar nota a la empresa ST Consultores a fin de que pueda brindar las explicaciones correspondientes en relación al error en el envío de las notificaciones.

Comunicar al Área de Declaraciones Juradas a sus efectos.

1. Consideración del Acta de la sesión anterior

1.1- Se da lectura al Acta N°1120, Sesión N°7/2026 de 12 de marzo del 2026.

Se resuelve:

Aprobar la referida Acta sin observaciones.

2. Asuntos repartidos por Asesoría Letrada

2.1- Expediente 2025-34-1-0000182- Anteproyecto de Decreto Reglamentario de los artículos 40 a 43 de la Ley N°19.823 de fecha 18/09/2019. Informe de Asesoría Letrada.

Se resuelve:

Mantener a estudio de los Directores Dra. Ana Ferraris y Dr. Luis Calabria.

2.2- Expediente 2026-34-1-0000051 – SAIP – Solicitud de acceso a la información pública. ID 8992. [REDACTED]

Se resuelve:

1) Denegar el acceso a la información, en referencia a la solicitud efectuada por [REDACTED], titular de la cédula de identidad número [REDACTED], al amparo de lo dispuesto por la Ley N°18.381, de 17 de octubre de 2008, por tratarse de información reservada que la JUTEP debe custodiar por previsión legal expresa.

2) Pase a Transparencia Pasiva a efectos de notificar al solicitante, entregando copia del informe letrado donde figura el link a la declaración jurada del Dr. Jorge Díaz cuando se desempeñaba como Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

3785

3) Cumplido, archívese.

(Resolución N°41/2026 en anexo)

2.3- Expediente 2023-34-1-0000196 - Petición de miembro alterno

(2do.suplente) del directorio de la persona pública no estatal INACOOOP, sobre la obligatoriedad de presentar declaración jurada de acuerdo al cargo que ocupa.

Se resuelve:

Vuelva a Asesoría Letrada (Dra. Valentina Vilar) a fin de redactar el proyecto de resolución de acuerdo a lo informado en folios 7 a 9.

2.4- Expediente 2025-34-1-0000310- Recurso de revocación y anulación contra resolución 338/2025 de JUTEP.

Se resuelve por mayoría:

1) No hacer lugar al recurso de revocación interpuesto por la Intendencia de Salto contra la Resolución 338/2025 de 2-10-2025, por los fundamentos expuestos en el cuerpo de esta resolución.

2) Pasar a Secretaría a efectos de notificar la Resolución al recurrente.

3) Franquear el recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura.

4) Cumplido, archívese.

(Resolución N°44/2026 en anexo)

Fundamentos del voto negativo del Director Vocal Dr. Luis Calabria

Se discrepa con lo resuelto por la mayoría en base a los siguientes fundamentos:

En primer lugar, corresponde reconocer que el informe formulado por la Asesoría Letrada introduce una modificación relevante respecto de la resolución original impugnada, en tanto descarta de forma expresa la configuración del supuesto de “corrupción”. Este extremo resulta determinante, pues corrige el encuadre jurídico inicialmente adoptado por la mayoría del Directorio de la JUTEP al dictar resolución.

Cabe recordar que en el primer informe letrado tampoco se hacía referencia a “corrupción”, sino que dicha figura aparece recién al momento de dictarse resolución por parte del Directorio.

En este contexto, si el propio análisis técnico descarta la configuración de “corrupción”, no resulta jurídicamente sostenible mantener el reproche.

El nuevo informe letrado vuelve a delimitar con mayor precisión la naturaleza del caso. Tal como surge del mismo, no se verifican en la especie los requisitos que la norma y la doctrina exigen para poder hablar de “corrupción”.

Es dable señalar que en ninguno de los dos informes de la Asesoría Letrada -elaborados por Asesoras diferentes- se hace referencia al concepto de “corrupción”. No obstante, ello, la mayoría del Directorio opta por apartarse nuevamente del informe técnico, reintroduciendo -sin sustento jurídico- la gravosa consecuencia que emerge del artículo 12 de la Ley N.º 19.823.

Por tanto, se desoye el análisis técnico especializado sin ofrecer fundamentos que permitan razonablemente desvirtuarlo, afectando así los estándares de

motivación, racionalidad y control de la discrecionalidad que deben regir toda decisión administrativa, particularmente en órganos de contralor.

Asimismo, la resolución impugnada no satisface el deber de motivación exigible para volver regular la decisión. Como ensaña García de Enterría “motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto”.

A la luz de este criterio, la motivación ofrecida resulta claramente insuficiente, y ello impide verificar la razonabilidad del encuadre jurídico configurando así un vicio que compromete su validez.

Profundizando el análisis, y yendo al fondo del asunto, se observa que se mantiene incólume el postulado relativo a la supuesta irregularidad derivada de la relación de dependencia funcional entre personas vinculadas por lazos de parentesco, lo cual -a mi juicio- conduce a una conclusión jurídicamente incorrecta.

En este punto, corresponde señalar que adherimos a la corriente doctrinaria expresada por el profesor Juan Pablo Cajarville, quien ha sostenido de forma expresa que las prohibiciones vinculadas a relaciones de parentesco en la función pública deben ser interpretadas de manera estricta, atendiendo a su ámbito específico de aplicación y evitando extensiones analógicas que desnaturalicen su sentido, y más aún, que no aplican a los cargos políticos o de particular confianza.

Es el criterio que incluso sostuvo la propia JUTEP con anterioridad. A saber, en el año 2007 la Junta Departamental de Maldonado formuló una consulta a la por entonces Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, antecesora de la JUTEP, la que, para evacuarla, contrató al catedrático Juan Pablo Cajarville Peluffo (exp. 002/2007).

El prestigioso profesor sostuvo en esa Consulta que, cuando estamos ante cargos “políticos o de particular confianza”, la **“selección de la persona que merece la confianza política o ‘particular’ para ocupar esos cargos queda librada a la discrecionalidad del respectivo jerarca al que corresponde la potestad de designarla. La discrecionalidad de esa opción es de fuente constitucional, y por ende no puede ser restringida o limitada por normas infraconstitucionales”** (el destacado nos pertenece).

Continuaba el profesor Cajarville: **“Ninguna norma constitucional excluye, ni permite excluir por ‘reglas de derecho’ inferiores, la opción por las personas a que se refiere el inc. 1° del artículo 35”** (en referencia al Decreto 30/003).

Y concluía en aquella Consulta: **“De manera que el principio de interpretación conforme a la Constitución de todas las demás normas del ordenamiento impone concluir que los titulares de cargos ‘políticos o de particular confianza’, declarados tales conforme a la Carta, están excluidos de las prohibiciones del mentado artículo 35”** (el resaltado nos pertenece).

Por tanto, el principio de interpretación conforme a la Constitución impone reconocer que los titulares de cargos políticos o de particular confianza se encuentran excluidos de las prohibiciones generales en materia de parentesco.

3789

Esta construcción doctrinaria mantiene plena vigencia. Su fundamento no radica en el rango de la norma eventualmente restrictiva -sea reglamentaria o legal- sino en la primacía de la Constitución como fuente directa de la potestad de designación.

En efecto, por aplicación del principio de supremacía constitucional, las normas de jerarquía inferior no pueden restringir, directa ni indirectamente, potestades que encuentran su fuente inmediata en la Constitución de la República.

En consecuencia, los cargos de particular confianza responden, por su propia naturaleza, a un criterio de designación política directa, basado en la confianza personal y funcional del jerarca, configurando un estatuto jurídico específico que no admite restricciones provenientes de normas infraconstitucionales.

Desde esta perspectiva, el dato del parentesco y de la relación funcional no resulta jurídicamente idóneo, por sí mismo, para fundar un reproche, en tanto se inserta dentro de un régimen de designación constitucionalmente habilitado.

Aun en el plano ético, dicho elemento carece de aptitud suficiente para sustentar un reproche autónomo cuando el propio ordenamiento ha definido un ámbito de discrecionalidad constitucionalmente protegido. Admitir lo contrario implicaría convertir a la ética pública en una vía indirecta de restricción de potestades constitucionales. Más aún, la ausencia de infracción jurídica no puede ser suplida mediante construcciones valorativas que, bajo la invocación de principios éticos, operen en los hechos como mecanismos sancionatorios sin base normativa suficiente. Hacerlo resultaría arbitrario.

Por lo dicho, la decisión de la mayoría no solo carece de sustento jurídico suficiente, sino que evidencia una forma de razonamiento que tensiona los límites propios del control institucional. Cuando un órgano de contralor se aparta de su propia base técnica sin fundamentación adecuada y reconfigura el encuadre normativo para sostener un reproche previamente debilitado, se corre el riesgo de sustituir el control de juridicidad por criterios variables, afectando la previsibilidad y consistencia de sus decisiones.

No se trata, por tanto, de una mera discrepancia interpretativa, sino de una cuestión de límites institucionales. El control ético no puede construirse al margen del derecho ni en contradicción con él.

Por las razones expuestas, entiendo que no se ha configurado vulneración alguna al ordenamiento, y que la decisión adoptada por la mayoría no solo resulta improcedente en términos jurídicos y éticos, sino también inconveniente desde el punto de vista institucional, en tanto desdibuja el rol que la JUTEP está llamada a cumplir.

3. Asuntos repartidos por Declaraciones Juradas

3.1- Expediente 2023-34-1-0000011 – SAIP – Solicitud de acceso a la información pública formulada por [REDACTED] en base a la Ley N°18.381.

Se resuelve:

Archivar las presentes actuaciones.

4. Asuntos repartidos por Administración y Finanzas

3791

4.1- Expediente 2026-34-1-0000081 - Contratación de becarios de UTU para tareas administrativas.

Se resuelve:

Aprobar la contratación de becarios de acuerdo al art. 563 de la Ley N°20.446.

Pase a Administración y Finanzas a sus efectos.

5. Asuntos a conocimiento de los señores Directores

5.1- Expediente 2023-34-1-0000144 – Protocolo de actuación para la solicitud de declaraciones de carácter complementario.

Se resuelve:

Mantener a despacho.

5.2- Expediente 2026-34-1-0000038- Reestructura organizativa y de puestos de trabajo de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Se resuelve por mayoría:

1) Aprobar la estructura organizativa que luce incorporada en los anexos que forman parte de la presente resolución (Anexo I Organigrama y Anexo II - Manual de organización y funciones).

2) Pase a la Oficina Nacional del Servicio Civil y oportunamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

(Resolución N°43/2026 en anexo)

Fundamentos del voto negativo del Director Vocal Dr. Luis Calabria

No acompaño el proyecto sometido a consideración, tanto por razones de forma como de fondo. Este Director entiende que se introducen modificaciones sustantivas en el funcionamiento institucional de la JUTEP que no resultan

compatibles con un enfoque garantista, ni con las exigencias propias de un organismo de contralor.

En primer lugar, el proceso de reestructura carece de sustento constitucional en el actual período de gobierno. En efecto, la reestructura invocada fue oportunamente aprobada por el artículo 519 de la Ley 20.212, ley de Rendición de Cuentas correspondiente a la pasada legislatura. Por imperio del artículo 216 de la Constitución de la República, el proceso quedó fuera del límite temporal previsto constitucionalmente para su vigencia y ejecutabilidad. El artículo 216 de la Constitución establece, en su inciso segundo, que: “No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno...”.

Este mandato constitucional consagra el principio de temporalidad y especialidad presupuestal, en virtud del cual las disposiciones contenidas en la ley de presupuesto o rendición de cuentas no pueden proyectar efectos más allá del período de gobierno para el cual fueron aprobadas. La doctrina nacional ha sido conteste en señalar que esta norma impide la utilización del instrumento presupuestal como vehículo para introducir regulaciones de alcance permanente o estructural desvinculadas de la gestión concreta del período correspondiente.

En este sentido, la pretensión de ejecutar en el presente período una reestructura aprobada en un período de gobierno anterior desconoce la lógica constitucional del ciclo presupuestal. Por tanto, corresponde afirmar que, si se entiende necesaria o conveniente una reestructura institucional de la JUTEP, la

misma debió ser incorporada en la ley de presupuesto del presente período de gobierno o, en su defecto, en la próxima ley de rendición de cuentas, respetando así el marco constitucional aplicable.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la estructura actualmente vigente de la JUTEP presenta una organización en la cual dependen directamente del Directorio áreas sustantivas como Asesoría Letrada, Asesoría Económico-Financiera, Declaraciones Juradas -con sus funciones de Registro, Custodia y Archivo-, Administración y Finanzas, Capacitación, Informática y Secretaría Administrativa. Este diseño responde a una lógica de centralidad funcional y de control directo por parte del órgano jerarca que no puede ser desatendida sin afectar el equilibrio institucional.

Dejando de lado ese obstáculo constitucional, sobre el fondo de la reestructura cabe señalar que preocupa especialmente la redefinición funcional de áreas y funciones sensibles. Así, por ejemplo, se genera una División de Gestión de Denuncias. Las Denuncias hasta hace poco tiempo eran canalizadas directamente hacia la Asesoría Letrada, la que a partir de la reestructura pasa a ser un Departamento Jurídico Notarial. El cambio no es neutro. Supone un desplazamiento institucional de la función jurídica desde el centro del proceso decisorio hacia una posición periférica.

Esa nueva configuración de Asesoría Letrada como unidad de apoyo resulta insuficiente frente a las exigencias del organismo. En un organismo de contralor, la Asesoría Letrada no es un servicio accesorio ni un apoyo técnico eventual, sino un verdadero órgano estructural de garantía.

La Asesoría Letrada debe cumplir ese rol de garantía, con intervención preceptiva en algunos procedimientos, particularmente en aquellas que

involucren acceso a información reservada como el análisis de declaraciones juradas o resolución de denuncias.

Su intervención controla la juridicidad del procedimiento y por tanto condiciona la validez misma de la decisión administrativa. Desplazar ese rol hacia un esquema en el que la intervención jurídica queda sujeta a requerimientos eventuales o discrecionales implica debilitar los procesos de contralor.

La juridicidad del accionar del organismo no puede quedar librada a intervenciones eventuales o discrecionales, sino que debe integrarse como un componente necesario y previo del proceso decisorio del Directorio. De lo contrario, la juridicidad deja de ser una condición de formación del acto administrativo para pasar a ser una instancia eventual, posterior o incluso prescindible. Ello resulta particularmente grave en materias sensibles -como denuncias y declaraciones juradas- donde el acceso y tratamiento de información amparada por reserva legal exige controles jurídicos previos, estrictos y no delegables.

En definitiva, no se trata de una mera reconfiguración organizativa, sino de una alteración de la arquitectura de garantías internas del organismo. Un órgano de control que debilita su función jurídica se debilita a sí mismo.

También se realizan modificaciones sobre Declaraciones Juradas. Dentro de la descripción de responsabilidades se señala que corresponde “Analizar y procesar denuncias referidas a declaraciones juradas de sujetos obligados” y figura como un producto esperable: “informe de respuesta a la denuncia

3795

referida a DDJJ”, por lo que se le está confiriendo una facultad a la nueva División cuando se está proyectando una División de Gestión de Denuncias.

Esto supone, además, una desconcentración de potestades sensibles sin una clara definición de controles jurídicos, generando riesgos en el manejo de información especialmente protegida.

A ello se suma la falta de claridad en la delimitación de competencias entre las distintas unidades proyectadas, en particular entre la División de Declaraciones Juradas y la División de Gestión de Denuncias, lo que puede generar superposición funcional, ambigüedad en la asignación de responsabilidades y debilitamiento de los mecanismos de control.

Asimismo, la ausencia de una Secretaría con entidad orgánica definida no resulta algo menor. La inexistencia de una unidad que centralice la tramitación, asegure la regularidad procedimental, garantice la trazabilidad de las actuaciones y estructure el funcionamiento del órgano colegiado, constituye una debilidad significativa. En todos los organismos, la Secretaría no es un mero soporte administrativo, sino una pieza esencial del debido proceso administrativo y de la continuidad institucional. Su omisión en el diseño propuesto no puede considerarse un aspecto menor.

Esta omisión resulta particularmente llamativa a la luz del análisis comparado de otros organismos descentralizados, en los cuales la existencia de Secretarías Generales o de Directorio constituye una constante organizacional (ANTEL, URSEC, INAU, INISA, entre otros), cumpliendo funciones clave en la articulación institucional y en el soporte del órgano jerarca.

Del mismo modo, se advierten inconsistencias en la jerarquización de las áreas jurídicas dentro del diseño propuesto. Mientras en múltiples organismos

análogos la función jurídica reviste nivel de División o depende directamente del Directorio, como ya advertimos, en el presente proyecto se la relega a la categoría de Departamento, sin una justificación funcional clara, lo que refuerza la preocupación sobre el debilitamiento de la función de control de legalidad.

También se observan vacíos relevantes en la definición de funciones estratégicas, tales como la representación internacional del organismo, aspecto que en otros entes se encuentra claramente asignado a unidades específicas o jerarquizadas, así como la ausencia de previsiones claras respecto a unidades de transparencia y acceso a la información pública.

En igual sentido, la creación del Observatorio como División, sin una delimitación funcional precisa, introduce un elemento adicional de incertidumbre organizacional.

En definitiva, la reestructura propuesta presenta objeciones relevantes tanto en su fundamento constitucional como en su contenido institucional. No solo se apoya en una habilitación normativa cuya aplicación en el presente período resulta jurídicamente cuestionable, sino que además introduce una redistribución interna de funciones que debilita los controles jurídicos previos, afecta la centralidad de la función de legalidad y genera zonas de incertidumbre en el tratamiento de materias especialmente sensibles. Ello compromete la solidez institucional del organismo y expone sus decisiones a mayores riesgos de invalidez y cuestionamiento.

Por estas razones, no se acompaña el proyecto.

3797

5.3- Nota de Asesoría Letrada – Designación como miembro del Tribunal, llamado a contador público en JUTEP.

Se resuelve:

Tomar conocimiento de la nota presentada.

Comunicar la resolución N°42/2026 de fecha 19 de marzo del 2026.

5.4- Expediente 2020-34-1-000009- Actuación de oficio - Banco de Previsión Social (BPS).

Se resuelve:

Archivar las presentes actuaciones.

Las resoluciones adoptadas en la presente acta forman parte integrante de la misma. No siendo para más, se da por concluida la sesión a la hora 12:15.

La presente será aprobada por los señores Directores en la próxima sesión del Directorio.

Firmado por:

Presidenta Dra. Ana María Ferraris

Vicepresidente Cr. Alfredo Asti

Vocal Dr. Luis Calabria